

Guadalajara Jalisco, a 30 de octubre del 2024

C. JOEL PEREZ SALINAS
Presente

En atención a su solicitud de Acceso a la información Pública, ingresada **ante la Unidad de Transparencia del Servicio Estatal Tributario de Jalisco, en atención al acuerdo PF/AS/262/2024**, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, **con fecha de recepción oficial el día 29 de octubre del 2024**, mediante la cual solicita la siguiente información:

“Se solicita de la manera más atenta y respetuosa con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, información sobre el cumplimiento de sentencia con número de expediente 213/2023 en la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en la cual se decreta la nulidad de referendos y multas y hasta el momento no hay gestiones tendientes al cumplimiento ya que esta misma se dictó con fecha de 26 de Mayo del 2023 y causó estado el 22 de Agosto del 2023 por lo cual solicito de la manera más atenta y respetuosa con su apoyo ya que es mi deseo poner en orden mi vehículo y sola mente de su parte me hace falta el código de descuento de los referendos 2018, 2019 y 2020 mismos que se dieron nulidad y del Ayuntamiento de Guadalajara solicito informes tendientes al cumplimiento de la eliminación de la multa, me despido de ustedes muy atentamente esperando el apoyo de su parte para estar al corriente con mis contribuciones.”

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se otorgó el registro de la solicitud bajo el número de expediente: **UTI / SOLICITUD/685 / 2024.**

Se le informa que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA versa EXCLUSIVAMENTE al acceso de los DOCUMENTOS QUE POSEE UN SUJETO OBLIGADO POR CAUSA DE SUS OBLIGACIONES, FACULTADES Y/O COMPETENCIAS, los cuales deben ser entregados TAL CUAL OBRAN EN NUESTROS ARCHIVOS, no existiendo la obligación de generar documentos “ad-hoc” (a modo) o procesar la información que existe en ellos, en términos del Artículo 87 numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios donde se establece que la información se entrega en el estado que se encuentra, no existiendo obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre, aunado lo establecido en el CRITERIO DE INTERPRETACION 03/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI.

Por otra parte, es importante poner a su consideración lo siguiente:

PRIMERO. - Es necesario clarificar que del contenido de su escrito se advierte que el mismo no constituye el ejercicio del derecho de acceso a la información, sino el ejercicio del derecho de petición.

En este sentido, es menester recordar los alcances del derecho a la información y no confundirlo con el derecho de petición, ya que de conformidad a los criterios jurídicos adoptados por el propio Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) existe una diferencia entre el ejercicio de ambos derechos.

Específicamente en el documento denominado “Consideraciones sobre las diferencias entre el derecho a la información y el derecho de petición”, emitido el 31 de marzo de 2009 por el Consejo del ITEI, se señala en sus páginas 27 y siguientes que el objeto del **“derecho a la información”** es el de “[...] solicitar la información referente a todos y cada uno de los documentos que en ejercicio de sus atribuciones generen y que reflejen precisamente la toma de decisiones de los sujetos obligados o de aquéllos que por cualquier concepto reciban, administren o apliquen recursos públicos [...]”; en tanto que, en el caso del **“derecho de petición”**, “[...] su finalidad no es propiamente resolver sobre el suministro de información pública tangible y con soporte documental, sino que su exigencia es responder por escrito, es decir, generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de quien ejerce su derecho [...]”.

SEGUNDO. - No obstante lo anterior, **y como respuesta a su escrito en comento**, de conformidad a lo antes fundado y motivado, y partiendo del estudio jurídico denominado “Consideraciones sobre las diferencias entre el derecho a la información y el derecho de petición”, emitido el 31 de marzo de 2009 por el Consejo del ITEI, se hace de su conocimiento lo siguiente respecto al ejercicio del **“Derecho de Petición”**:

1. En el ámbito nacional, el “derecho de petición” encuentra su **fundamento legal** en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El **objeto del derecho de petición** se puede realizar formulando planteamientos de situaciones que afecten la esfera de cualquier persona, solicitar servicios públicos, o exigir explicaciones sobre las deficiencias de aquellos, ejercer derechos, interponer quejas, acciones o recursos legales; es decir, su finalidad no es propiamente resolver sobre el suministro de información pública tangible y con soporte documental, sino que su exigencia es responder por escrito, es decir, generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de quien ejerce su derecho. En otras palabras, su misión es mantener un vínculo de comunicación entre el gobernante y el gobernado, con el objeto de que este último se haga escuchar por el primero sobre cualesquiera que sean sus inquietudes y recibir atención puntual a sus problemáticas; el derecho de petición es utilizado en procesos judiciales, con independencia de la materia de que se trate, en cuyo caso, sólo podrá hacer uso de este derecho y esperar una respuesta acorde a sus planteamientos, quien demuestre ser parte del proceso de que se trate, es decir, un interés jurídico, lo cual no acontece tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información.

3. La **titularidad del derecho de petición** corresponde a cualquier persona; sólo se limita en materia política a los mexicanos y en procedimientos jurisdiccionales a quienes tengan interés jurídico.

4. Los **responsables del ejercicio del derecho de petición** son los funcionarios o empleados públicos, en su carácter de autoridad, es decir, una relación entre gobernante y gobernado, que generalmente deviene de un reclamo o exigencia social.

5. Los **requisitos del derecho de petición** es que el mismo se ejerza a través de un escrito dirigido al servidor o funcionario público, de manera pacífica, respetuosa y señalando domicilio para ser notificado; además de que deberá acreditarse el interés jurídico en el caso concreto.

6. El **plazo para resolver el ejercicio del derecho de petición** formulado mediante un escrito que reúna los requisitos previamente señalados, es el de un breve término, que deberá entenderse como el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva, sin que, desde luego, exceda de cuatro meses, de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. Respecto a los **elementos de la respuesta del derecho de petición**, bastará con que se emita una respuesta en breve, que ésta sea congruente y sea notificada personalmente, sin tener que responderse en cierto sentido.

8. En caso de **inconformidad**, es decir, en el supuesto de que la autoridad no emita una respuesta dentro de un término razonable, no debiendo perder de vista que ésta debe ser breve y sin que exceda de cuatro meses, el titular del derecho de petición, a diferencia del de acceso a la información, no tiene una instancia previa ante la cual acudir en caso de violaciones perpetradas al ejercicio de este derecho, por lo que, deberá acudir a los Tribunales Federales a interponer el juicio de amparo, con las excepciones que se prevén en los procedimientos legales donde existen recursos previos al juicio de garantías.

Por otro lado, y en aplicación de los principios rectores de la materia de transparencia y acceso a la información, se hace de su conocimiento que dentro de las facultades y atribuciones de la Procuraduría Fiscal, adscrita a esta Secretaría, establecidas en el artículo 57 del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, se encuentra la de comparecer y representar a la Secretaría de la Hacienda Pública en todos los conflictos jurisdiccionales y contenciosos administrativos y fiscales en los que éstas sean parte, siempre y cuando estén vinculados con las áreas competencia de la de la Hacienda Pública, tanto en el ámbito estatal, como en el ámbito federal, o municipal (...), así como resolver los recursos administrativos que, en materia de impuestos estatales o municipales administrados por el Estado, derivado de la suscripción de los Convenios de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial, así como los interpuestos en materia federal en cumplimiento al Convenio de Colaboración Administrativa, interpongan los contribuyentes, con estricta observancia de las disposiciones legales aplicables, pudiendo requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la documentación, datos e informes que sean necesarios para la substanciación de los recursos hechos valer contra actos o resoluciones del Secretario de la Hacienda Pública o los titulares de las áreas organizativas, direcciones de área, coordinaciones, unidades departamentales u oficinas de recaudación fiscal de la Hacienda Pública del Estado, así como a las autoridades fiscales previstas en el artículo 22 del Código Fiscal del Estado.

Por otra parte se pone a su disposición la liga electrónica “Boletín electrónico” del Tribunal de Justicia Administrativa, donde podrá consultar el estatus en que se encuentra el juicio del que solicita información:

<https://tjajal.gob.mx/boletines>

Lo anterior, que de conformidad al **artículo 87 numeral 2** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece lo siguiente:

“Artículo 87 numeral 2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vía internet, bastará con que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente...”

S H P / UTI -16824/2024
FOLIO PNT 143160924000642
UTI / SOLICITUD/ 685 / 2024

Por todo lo anteriormente expuesto se advierte que el C. SOLICITANTE, EXIGE SE LE OTORGE UNA RESPUESTA RAZONADA Y LEGAL. Esto implica una ENTREGA DE EXPLICACIONES, lo cual este ente público **NO ESTA OBLIGADO A HACER**, pues sus pretensiones **EXCEDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN** y la vía correcta es el ejercicio del **DERECHO DE PETICIÓN**.

Así las cosas, le comunico que el Servicio Estatal Tributario está en la mejor disposición de otorgar la información que los ciudadanos solicitan en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y en este caso, en cumplimiento a lo señalado por el artículo 82 numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se le informa que deberá cumplir con la prevención para efectos de tener por solventada la falta del requisito señalado en los artículos 79 numeral 1, y 82 la citada ley, lo cual deberá realizar dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la notificación de esta prevención, ya que de no ser así se tendrá por no presentada la solicitud.

ATENTAMENTE



ESTEFANIA DEL CARMEN CANELA COVARRUBIAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO

*"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano,
así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"*

ECCC/MKPB/NLGT